

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	Diana Marcela García Quintero
DEMANDADA	i) Comfenalco ii) Junta Regional de Calificación de Invalidez iii) Junta Nacional de Calificación de Invalidez iv) Liberty Seguros de Vida S.A.
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 021 2015 00883 02
TIPO DE PROCESO	Ordinario laboral
DECISIÓN	Modifica agencias en derecho
ACTA DE DECISIÓN No.	157 de 2022

Medellín, once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por el apoderado de la parte demandante, contra la decisión del 30 de marzo de 2022, que liquida y aprueba la liquidación de costas.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

En sentencia de segunda instancia del **20 de febrero de 2020** se revocó y confirmó la sentencia de primera instancia, declarándose que carece de todo efecto jurídico la terminación del contrato de trabajo de la demandante ocurrida el 31 de julio de 2012 por parte de Comfenalco Antioquia, a quien ordenó reintegrarla al cargo que desempeñaba al momento de su despido o a otro de igual categoría, teniendo en cuenta sus condiciones de salud, con el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, en caso de hacerse necesario. Se condenó a Comfenalco Antioquia a pagar a la demandante:

- Los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro, entendiéndose que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio, con base en la suma de \$1.494.000 para el periodo 31 de julio al 31 de diciembre de 2012, y sobre tal base, pagará las prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones de dicho período. Y aplicar los incrementos anuales legales o los extra legales correspondientes al cargo y sobre estos, pagará los salarios, las prestaciones sociales y los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde el 1º de enero de 2013 hasta el momento en que se produzca el reintegro efectivo y los que se sigan causando en adelante.
- La indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en ciento ochenta días de salario, equivalente a \$8.964.000.
- Los salarios y demás derechos laborales causados y la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debidamente indexados.

Se declaró probada la excepción de compensación y se autorizó a Comfenalco Antioquia para descontar del valor de la condena impuesta, las sumas que por concepto de liquidación del contrato de trabajo e indemnización por despido injusto pagó a demandante, sumas que igualmente se indexarán al momento de la compensación respectiva.

Se establecieron las costas en ambas instancias en favor de la demandante y a cargo Comfenalco Antioquia. En esta instancia se fijó por agencias en derecho en la suma de \$4.000.000.

En auto del **7 de octubre de 2021** se liquidaron las costas, fijándose la suma de \$100.000 en primera instancia y \$4.000.000 en segunda instancia.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, indicando que no se ingresaron los gastos efectuados por concepto de notificaciones, ni los cancelados para el dictamen pericial. Cita el Acuerdo 1887 de 2003, resaltando que en el proceso se logró modificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que inicialmente fue dictaminado por Liberty Seguros de Vida S.A. y la sentencia ordenó un reintegro (obligación de hacer), así como cancelar los conceptos que en su momento consideró el H. Tribunal le eran adeudados a la demandante, los que se aportaron en memorial del 23 de septiembre de 2021.

Afirma que no se respetó los respectivos topes: i) El 25% del valor de la condena, y ii) 4 salarios mínimos legales vigentes por obligación de hacer. Lo anterior, porque el valor fijado por concepto de agencias fue de \$100.000 y debió ser de \$3.634.104 que equivalen a 4 SMLMV para 2021, y \$70'508.500 que es el 25% del valor de la condena por obligación de dar, más lo otorgado en segunda instancia. A juicio del recurrente, las sumas fijadas no resultan acordes a la naturaleza del proceso, duración, y a su actividad cuya intervención fue eficaz y muy profesional de acuerdo con lo delegado.

Solicita se modifique el valor de las agencias en derecho fijadas por el *a quo* y aclare que están a cargo de Comfenalco y en favor de la demandante, pues la providencia recurrida da a entender lo contrario.

Preliminarmente se hace necesario exponer que, corrido el traslado para alegar, ninguna de las partes presentó alegaciones ante esta instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar si el valor fijado en primera instancia por agencias en derecho, se encuentra acorde con los parámetros establecidos por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

El numeral 4 del artículo 366 del Código General del Proceso prescribe:

“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”

De acuerdo a esta norma, para la fijación de las agencias en derecho el Juez debe aplicar las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y tener en cuenta las circunstancias especiales que allí se señalan.

Toda vez que la acción judicial de la referencia, fue presentada el **22 de junio de 2015**, la normatividad aplicable es el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, conforme al artículo 7º del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

Según lo dispuesto en el referido Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, las agencias en derecho a favor del trabajador, en los procesos ordinarios laborales de primera instancia, se tasan de la siguiente manera:

“2.1.1. A favor del trabajador:

(...)

Primera instancia.	Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.
	En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(...)

PARÁGRAFO. Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”

Pues bien, en primera instancia se fijaron como agencias en derecho \$100.000, debiéndose aclarar que las mismas son a cargo de Comfenalco y en favor de la demandante, y no como se indicó en el auto recurrido.

Ahora, atendiendo a las condenas proferidas en la sentencia de segunda instancia del 20 de febrero de 2020, y conforme al Acuerdo 1887 de 2003 numeral 2.1.1., se **MODIFICAN** las agencias en derecho de primera instancia, fijándose la suma de \$3.634.104 por la obligación de hacer correspondiente al reintegro, la cual lleva implícita el reconocimiento de las acreencias laborales ordenadas. Más la suma de \$1.075.680 equivalente al 12% de las sumas liquidadas en la sentencia, para un total de **\$4.709.784** por agencias en derecho de primera instancia a cargo de Comfenalco y en favor de la parte demandante.

Si bien el recurrente alude a gastos efectuados por concepto de notificaciones y dictamen pericial, no indica los valores, ni se advierten en el expediente facturas en tal sentido para incluirse en liquidación.

Así, la suma de **\$4.709.784** está dentro del rango establecido en la norma, y además de resultar razonable, está acorde con los criterios necesarios para su tasación. Pues consulta la naturaleza y duración del proceso, así como la calidad de la gestión realizada por el apoderado de la demandante, quien presentó la demanda, asistió a las audiencias fijadas en el proceso y en general, cumplió con las cargas y deberes procesales que le incumbían con diligencia.

El monto señalado está acorde con los parámetros fijados en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que, se considera procedente por esta superioridad modificar la tasación de costas, en materia de agencias en derecho fijadas a favor de la parte actora, en tanto el multicitado acuerdo del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, establece un mínimo y un máximo, bajo la acepción “*hasta*”, parámetro dentro del cual debe hacer las consideraciones el juzgador atendiendo a las particularidades del proceso.

Por lo tanto, se **MODIFICARÁ** la decisión que se revisa en apelación.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **Sala primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín,**

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el monto de las agencias en derecho de primera instancia, fijando por este concepto la suma de **\$4.709.784** a cargo de COMFENALCO y en favor de la señora DIANA MARCELA GARCIA QUINTERO, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

FRANCISCO ARANGO TORRES

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 142 de agosto 12 de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres

Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3784e4fc7ecc9d76f92c5b66484da45ac98c5bc62920a77e8e33cb58435a22e2**

Documento generado en 11/08/2022 02:00:24 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>